



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, D.E.I. y P., treinta (30) de septiembre dos mil veintiuno (2021).

Radicado	08-001-33-33-006- 2017-00441 -00
Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a dictar sentencia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:

II. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES

Como pretensiones de demanda, la actora presentó las que a continuación se transcriben:

- 1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el artículo 1. de la Resolución SSPD 20168200088615.*
- 2. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante la resolución SSPD 201780000504D5 únicamente en cuanto confirman la sanción impuesta mediante la Resolución SSPD 20168200088615.*
- 3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que ELECTRICARIBE no está obligada a pagar el valor de la sanción impuesta mediante las resoluciones mencionadas en los dos numerales anteriores.*

2.2. HECHOS

Al realizar el estudio del cuerpo de la demanda y sus anexos, como fundamentos fácticos de las pretensiones de demanda, se transcriben los siguientes:

- El señor Israel de Jesús Blanco, identificado con el NIC 5874057, presentó petición el día 2 de Julio del 2015 radicado bajo el número RE1120201512566.
- Que el día 22 de Julio del mismo año, ELECTRICARIBE resolvió la petición, bajo el consecutivo número 3025960.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

- El día 24 de Julio del 2015, realizó el envío de la citación personal, bajo la guía 2860532901141, lo cual se hizo de manera oportuna toda vez que la citación fue puesta en el correo dentro de los cinco (5) días siguientes a la respuesta.
- Al no presentarse el señor Israel de Jesús Blanco dentro del término para ser notificado personalmente, ELECTRICARIBE procede a hacer envío de la citación por aviso el día 1º de agosto del 2015 mediante guía No. 2860532901141 de BSI Colombia S.A.
- En el presente caso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió sancionar a ELECTRICARIBE por incurrir en Silencio Administrativo Positivo mediante las siguientes resoluciones 20168200088615 de 2016-06-09 y 20178000050405 de 2017-04-10.
- Es de aclarar que el único requisito que exige el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 es contestar dentro de 15 días siguientes a la presentación de la petición o recurso. En el presente caso, ELECTRICARIBE contestó en el término de los 15 días que tenía para dar respuesta, por lo que no hubo silencio administrativo positivo.

2.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION.

Como fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de su violación, presentó la parte actora los argumentos que a continuación se resumen:

❖ Primer cargo:

Infracción de las normas en que deberían fundarse. Violación del principio de legalidad de las faltas y las sanciones contemplado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. El silencio administrativo positivo no surge por yerros durante el procedimiento de notificación. El artículo 158 de la Ley 142 de 1994 únicamente contempla el silencio administrativo positivo por incumplimiento del plazo para dar respuesta.

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en materia administrativa sancionatoria, se observará el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones.

La norma con sustento en la cual se impuso la sanción no fue infringida, se observa que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo únicamente cuando la empresa no da respuesta dentro del término de 15 días.

Se destaca que la norma no contempla la ocurrencia del silencio administrativo por circunstancias distintas al plazo para dar respuesta.

En el caso en comento, se sanciona a ELECTRICARIBE por la ocurrencia de un silencio fundado en otro tipo de aparentes yerros, pese a que se encuentra plenamente probado que la empresa dio respuesta dentro del plazo legal, por lo tanto, declarar un silencio por razones distintas a las prescritas en las normas y sancionar a la empresa por ese silencio, implica una transgresión del principio de legalidad.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

En el presente caso en estudio, ELECTRICARIBE cumplió con su obligación de contestar dentro del plazo legal, tal como lo indica la constancia de envío de la citación para notificación personal que fue insertada en el correo dentro de los cinco días.

Consecuentemente no podía ser sancionada ELECTRICARIBE por la ocurrencia de un silencio administrativo positivo derivado del incumplimiento del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, debido a que ello implicaría una violación al principio de legalidad, teniendo en cuenta que el citado artículo únicamente contempla una obligación de dar respuesta oportuna y la respuesta fue dada dentro del término de los 15 días.

❖ Segundo cargo

Infracción del artículo 69 de la ley 1437 de 2011 esta norma no establece el término perentorio de un (1) día para enviar la notificación por aviso.

Electricaribe manifiesta que en el caso que nos ocupa la SSPD reconoció un silencio administrativo positivo y sancionó a ELECTRICARIBE al considerar que envió el aviso para notificación del usuario fuera del término fijado por el artículo 69 del CPACA, sin embargo, esa norma no establece ningún término perentorio para el envío del aviso.

Como se puede observar, esta norma únicamente señala la obligación de enviar el aviso “si no pudiese hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días” pero de ninguna manera establece que tal aviso deba enviarse al sexto día.

El término de 5 días es para que el usuario se notifique personalmente, pero no para el envío del aviso.

❖ Tercer cargo

Violación al debido proceso de la empresa por indebida valoración de la prueba al momento de contar los términos para hacer el envío del aviso de notificación.

En el presente caso la Superintendencia se equivocó al contabilizar los términos, debido a que ELECTRICARIBE envió el aviso dentro del término previsto por dicha Superintendencia.

El hecho de que lo haya enviado el día sábado, no por eso deja de ser el día sexto, pues es un día en que la empresa ELECTRICARIBE labora y es un día en que esta puede realizar el envío del aviso de notificación.

Lo anterior evidencia que hay una falta a la empresa ELECTRICARIBE ya que fue sancionada por la indebida valoración de las pruebas presentadas, como es la prueba del envío del aviso dentro del término de Ley, situación que a todas luces impide el nacimiento del silencio administrativo positivo.

❖ Cuarto Cargo

Desconocimiento del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación contenido en artículo 113 de la ley 142 de 1994.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

Debió concederse el recurso de apelación, debido a que el artículo 113 de la Ley 142 de 1994 es norma especial vigente para la expedición de actos unilaterales bajo el régimen de servicios públicos domiciliarios.

Por lo tanto, la negativa a la doble instancia, deviene en que la sanción impuesta en contra de Electricaribe es nula.

❖ **Quinto cargo:**

Violación al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el presente caso las resoluciones son nulas en razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al no haber mencionado la procedencia del Recurso de Apelación, violó de esta manera lo estipulado en el artículo 67 del CPACA.

Por lo tanto, en vista de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no hizo mención del recurso de apelación, la notificación es inválida y por lo tanto las resoluciones son nulas.

❖ **Sexto cargo:**

Infracción de las normas en que debería fundarse. art. 50 Ley 1437 de 2011. No hay proporcionalidad entre la sanción impuesta por valor de seis millones ochocientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta pesos mil (\$6.894.540) y la petición del usuario que es de menos de un millón de pesos (\$1.000.000).

En el caso en estudio, la cuantía de la sanción no es proporcional ni razonables a lo solicitado por los usuarios, ya que el usuario presentó petición en cuantía de \$1.000.000 y por un supuesto yerro en el procedimiento de notificaciones la Superintendencia de Servicios Públicos sancionó por valor de \$6.894.540.

La multa no es razonable ni proporcional en atención a la cuantía de la petición del usuario y peor aún, implica que ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. deberá atender a pérdida a este usuario por varios años mientras logra recuperar el monto de la sanción.

No hay proporcionalidad entre lo solicitado por el usuario y la sanción impuesta por la Superintendencia.

2.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.4.1. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

La entidad acusada, contestó la demanda en los siguientes términos:

Respecto de las pretensiones consignadas en el petitum de la demanda, me opongo a todas y cada una de ellas toda vez que los actos atacados se ajustan al análisis armónico de las normas aplicables en especial a las contenidas por los artículos 79, 25, 80 numeral 4º y 158 de la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001; el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995; el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996, el Decreto 990 de 2002, y en especial, el aludido artículo 79 de la Ley 142 de 1994, el cual prevé como una de las

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la de ejercer el control, inspección y vigilancia, en el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en especial, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios.

En cuanto a la petición del señor Israel de Jesús Blanco, fue radicada el día 2 de julio de 2015, por lo que, contabilizados los quince días hábiles desde la fecha de presentación de la petición, y la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. probó haber emitido respuesta a la petición objeto de la presente investigación, el día 22 de julio de 2015, es decir, dentro del término dispuesto en el art. 158 de la ley 142 de 1.994.

Respecto del proceso de notificación personal que la empresa debió surtir, esta Superintendencia encuentra que la empresa envió la citación al(a) usuario(a) el 24/07/2015 para notificación personal.

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a notificar por aviso el 1/08/2015. No obstante, lo anterior, como la citación se envió el 24/07/2015, el aviso debió remitirse el 3/08/2015; y no el 1/08/2015, como efectivamente se hizo, provocando así la extemporaneidad del mismo y por ende la indebida notificación, sin embargo se nota que en la certificación indica que el inmueble estaba CERRADO, por lo tanto debió cumplirse como lo indica el artículo 69 del CPACA, por no encontrarse evidencia que se cumplió con el requisito de publicar en la página web, se determina la configuración del SAP.

2.5. ALEGATOS

Electricaribe S.A E.S.P, presentó alegatos de conclusión dentro del término legal ratificando los cargos de nulidad propuestos con la demanda.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, presentó alegatos de conclusión ratificando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

2.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio público no presentó concepto.

II. TRAMITE PROCESAL

- La demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2017 y repartida a esta Judicatura en fecha 19 de diciembre de la misma anualidad. Mediante auto interlocutorio dictado por este Juzgado el 19 de febrero de 2018 se admitió la demanda.
- Surtidos los trámites de notificación, la entidad demandada contestó la demanda en fecha 03 de septiembre de 2020.
- Con base en lo señalado en la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, para proferir sentencia anticipada, el Despacho mediante auto de 24 de mayo de 2021, incorporó las pruebas allegadas y fijó el litigio del proceso.
- Ejecutoriado lo anterior, mediante auto de 04 de junio de 2021, se dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión.

- Finalmente, y vencido el referido traslado para alegar, ingresa el proceso a Despacho en estado de dictar sentencia.

IV. CONSIDERACIONES.

4.1. Validez de la actuación.

Revisadas las actuaciones procesales, no observa este Juzgado irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

4.2. Problema jurídico:

El problema jurídico en el presente asunto se concreta en determinar si la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 indicado como falta en el procedimiento sancionatorio, se concreta cuando vencido los 15 días dispuestos en esa norma, la respuesta no ha sido emitida y debidamente notificada por la entidad prestadora de servicios públicos, advirtiéndose que, para el trámite de notificación, se debe dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 68 y 69 de la ley 1437 de 2011.

Para dar respuesta al anterior problema, se estudiará la validez de los actos administrativos demandados, Resolución 20168200088615 del 9/06/2016 y SSPD 20178000050405 del 10/04/2017, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios bajo los cargos de nulidad de infracción a la norma en que debía fundarse y violación del debido proceso.

4.3. Tesis del Juzgado:

En el presente asunto, el Despacho sostendrá la tesis que, el silencio administrativo positivo, de acuerdo a lo señalado en la norma y jurisprudencia, se configura cuando el peticionario no recibe respuesta en el término señalado en el artículo 158 de ley 142 de 1994, esto es 15 días desde que se presenta la petición, plazo en el que además de emitirse la decisión debe notificarse en debida forma.

Sin embargo, al centrarse la decisión sancionatoria sobre el trámite de notificación surtido, el ente investigador realiza una interpretación errada de la norma (artículo 69 CPACA), imponiendo una carga excesiva a la empresa prestadora de servicios públicos, deviniendo en la ilegalidad de los actos acusados por ser expedidos con infracción de las normas en que debía fundarse.

4.4. Marco jurídico y normativo

➤ 4.4.1. Del Silencio Administrativo Positivo en Materia de Servicios Públicos Domiciliarios:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios”, subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, consagra el silencio administrativo positivo en los siguientes términos:

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

“Artículo 123. Ámbito de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo, contenida en el artículo. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la superintendencia de servicios públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicó la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto. Parágrafo. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario”.

De la norma en cita, se colige que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, están obligadas a resolver las peticiones, quejas y recursos que sean presentadas por los usuarios, dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación, so pena de configurarse el silencio administrativo positivo, entendiéndose que lo solicitado ha sido resuelto en forma favorable, el cual deberá reconocer sus efectos dentro de las (72) horas siguientes.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en sentencia de 13 de septiembre de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. No. 05001-23-31-000-2011-00984-01 (21514) sostuvo:

“3.1 El silencio administrativo es un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, a la falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados, se le da un efecto que puede ser negativo o positivo. Ese efecto se conoce como acto ficto o presunto pues, aunque en tales eventos no existe una decisión expresa que contenga la voluntad de la Administración frente al asunto que ha sido sometido a su consideración, la ley le da al silencio de la Administración unos efectos similares a los del acto administrativo expreso. La razón de ser del fenómeno del silencio administrativo es la de evitar que los asuntos que la Administración debe resolver queden sin decidir de manera indefinida.

3.2 Existen algunas diferencias entre los efectos del acto ficto negativo y del acto ficto positivo. Una de ellas es que mientras que la ocurrencia del silencio negativo no impide que la Administración se pronuncie sobre el asunto, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, la configuración del silencio positivo genera un acto presunto que tiene que ser respetado por la Administración.

3.3 Ahora bien, para que se configure el fenómeno del silencio positivo se deben cumplir tres requisitos: i) que la ley le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso etc.; ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo (en nuestro ordenamiento, la regla general es el silencio negativo); y iii) que la autoridad que estaba en la obligación de resolver, no lo haya hecho

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

dentro del plazo legal. Respecto de este último requisito, ha dicho la Sala que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, sino notificarse en debida forma.” (Subrayas y negrillas del Despacho)

Ahora bien, la satisfacción del derecho de petición ejercido ante las empresas de servicios públicos se da con la debida notificación de la respuesta a la solicitud, queja o recurso, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el cual señala:

La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.

Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto.

PARÁGRAFO. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia”.

De lo anterior se desprende que, la notificación de la respuesta a la petición y recursos debe darse según las formas de notificación previstas en el Código Contencioso Administrativo.

Los artículos 66 a 69 del CPACA, señalan el procedimiento para la notificación:

“Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.

Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos.

Artículo 68. Citaciones para notificación personal. *Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.*

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.

Artículo 69. Notificación por aviso. *Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.*

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.”

➤ **4.4.2. Sobre la delegación de funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y el recurso de apelación en procesos administrativos ante esta autoridad.**

Atendiendo al hecho que en el expediente de la referencia se acusan los actos administrativos demandados de ser expedidos con violación al debido proceso administrativo, al estimar que la encausada denegó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, el Despacho tendrá en cuenta los siguientes preceptos normativos y hará las siguientes precisiones:

La figura de delegación de funciones está consagrada en la Carta Política en el artículo 211¹, el cual es desarrollada mediante la ley 489 de 1998, que consagra como cláusula

¹ “Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios”.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

general la autorización legal para que las autoridades administrativas deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén expresamente prohibidos y cuando no figuren en el artículo 11 de esa misma Ley.

La delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello. La delegación administrativa implica²:

- (i) El ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones propias del funcionario delegante;
- (ii) Que la autoridad delegante pueda reasumir en cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y,
- (iii) La existencia de autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición expresa para delegar.

4.5. Caso concreto:

Con la demanda de la referencia, Electricaribe, solicita la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:

- a) Resolución SSPD – 20168200088615 del 2016-06-09 expedida por el Director Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que impuso multa equivalente a SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS (\$6.894.540,00 MIL). en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., por encontrarla culpable de ocurrencia de silencio administrativo positivo por falta de respuesta a la petición interpuesta por el usuario ISRAEL DE JESÚS BLANCO.
- b) Resolución SSPD-20178000050405 del 2017-04-10, expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que, al resolver recurso de reposición, confirmó la Resolución sanción.

Como soporte de la solicitud de nulidad, la parte actora presenta variados cargos de nulidad que el Despacho por técnica judicial entrará a resolver uno a uno de la siguiente manera:

4.5.1. Análisis crítico de los cargos frentes a las pruebas y premisas normativas.

Cargos de nulidad del primero al sexto.

Procede entonces el Despacho a estudiar los fundamentos propuestos por la parte actora para soportar los cargos, y comprobar si tienen vocación de prosperar:

El aspecto medular del presente juicio se cierne en establecer a quién le asiste la razón en la manera de cómo deben interpretarse armónicamente los artículos 69 del C.P.A.C.A. y 158 de la Ley 142 de 1994.

² CONSEJO DE ESTADO en sentencia con radicado número 11001-03-28-000-2012-00043-00.

Este cuestionamiento reluce de la manera como la SSPD entiende el surtimiento de la notificación por aviso, interpretación según la cual, el momento para enviar esa comunicación corresponde, **al día hábil siguiente a la consumación del plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación**, esto es, al día sexto, puesto que, en su opinión, para garantizar a los usuarios y/o suscriptores sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, no basta que la respuesta sea expedida dentro del término legal, sino además, debe ser puesta en conocimiento de aquellos que, lo debe hacer sirviéndose de la notificación por aviso, ello supone que el envío de la comunicación deba surtirse inmediatamente fenecido el plazo en que no fue posible notificarlos personalmente.

Pues bien, esta agencia judicial considera que las posturas que frente a la notificación por aviso fueron denotadas por los extremos del juicio, se contraponen, aun perteneciendo a un mismo método de interpretación legal, que no es otro que, el gramatical o textualista.

Frente a esto, empecemos señalando que la doctrina ha establecido la existencia de diversos criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas a fin de desentrañar pasajes oscuros o poco claros de las normas, o servir como instrumentos de guía al Juez para atribuir determinado significado al ordenamiento jurídico. Esos criterios de interpretación son: gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico, pragmático-consecuencialista, criterio valorativo y de ponderación de intereses y el criterio del precedente.

En lo que corresponde a la legislación colombiana, los artículos 27 al 30 del Código Civil reconocen, en suma, los métodos de interpretación establecidos por Savigny, a saber: los criterios gramatical, sistemático, histórico y teleológico, de los cuales, para el presente asunto, hemos de abordar únicamente, dos, el gramatical y el sistemático.

Así pues tenemos, que el **criterio de interpretación gramatical** de una determinada disposición hace referencia a la formulación de normas jurídicas con fundamento, esencialmente, en dos tipos de ejercicios por parte del intérprete, i) El primero, que refiere al entendimiento de la estructura sintáctica de la disposición, a fin de comprender los signos gramaticales, la naturaleza de los enunciados allí fijados (sujeto, verbo, predicado, etc), su función y las repercusiones para el entendimiento de la estructura de la oración; y ii) Segundo, consistente en la comprensión semántica de los términos que componen la disposición jurídica, punto en el que se ha establecido que hay lugar a interpretar las palabras bien sea en el sentido natural y obvio, el que la comunidad de hablantes le haya atribuido o siguiendo los significados técnicos que tengan, si es del caso.

En este orden de ideas, esta es la base legal para que los operadores jurídicos, en general, fundamenten la aplicación de los términos mencionados en la ley y que no encuentren significado distinto al establecido textualmente dentro del ordenamiento jurídico.

Por su parte, **el criterio sistemático** refiere a que la norma que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no exista contradicciones, incompatibilidad o incongruencia entre diversas disposiciones que componen un conjunto normativo.

Este criterio obedece a la idea según la cual, el ordenamiento jurídico puede ser concebido bajo la idea de un sistema, de allí, entonces, que la coherencia y la unidad se

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

califiquen como sus características. Esto implica, entonces, que por vía de este método puede el intérprete limitar, precisar o ampliar el radio de acción de una determinada disposición al contrastarla con otras normas consonantes con la materia que trata, pues toda disposición ha sido proferida en el marco de un amplio conjunto de disposiciones de igual jerarquía, con las que debe operar de manera consonante.

Precisa en qué consisten cada uno de los criterios de interpretación citados, viene al caso indicar que esa disposición superior a la que alude el criterio sistemático, para el caso que nos convoca, no es más que el debido proceso, derecho constitucional fundamental regulado en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales.

En este asunto, hemos de advertir que en disenso a lo denotado por los sujetos procesales en el objetivo de auscultar el sentido y alcance del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, nuestra posición interpretativa corresponde al criterio sistemático.

Bajo este método interpretativo tenemos que, si por la notificación se propugna el conocimiento real de las decisiones judiciales o administrativas con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso, y ello tiene por objetivo, delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes, el entendimiento que se le deba predicar al artículo 69 dependerá, de cómo se integre armónicamente la carga de la administración de adelantar oportunamente las diligencias de notificación y el deber de los administrados de comparecer dentro del término legal a notificarse de aquellas personalmente; porque esas cargas y deberes terminan siendo correlativos, por comportar garantías para ambas partes y no tan solo para una de ellas.

Por consiguiente, frente al cumplimiento de la carga de expedir la respuesta y notificarla al administrado oportunamente, le figura al ciudadano el no rehusarse de comparecer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento en que recibió la citación.

Sin embargo, de vencerse el plazo sin que, por alguna razón aceptable o no, aquel acuda a notificarse personalmente, el punto de partida para acometer el envío del aviso para la administración, dependerá del día a partir del cual el destinatario haya efectivamente recibido la citación en el lugar que indicó donde recibiría notificaciones, esto, para los casos en que la administración tenga conocimiento del domicilio o residencia del destinatario de la notificación y la citación no haya sido devuelta, dando cuenta de esto, la empresa de correos que haya adelantado la entrega de la comunicación, si es por este medio que fue surtida la diligencia.

Sería algo paradójico, que so capa de propugnar en la salvaguarda de las garantías fundamentales de los ciudadanos, por una interpretación gramatical con imposición de condiciones o plazos inexistentes a lo establecido objetivamente, las autoridades terminarán cercenándoles a los ciudadanos el plazo que tienen para comparecer a notificarse personalmente, por el simple apremio del vencimiento del plazo contado a partir del día en que fue remitida la primera comunicación.

Aunque el tenor del artículo 69 del C.P.A.C.A así parezca indicarlo, el sentido gramatical no puede imponerse de manera aislada a los principios constitucionales, porque, se reitera, bajo una metodología sistemática se puede vislumbrar que, el solo vencimiento del plazo desde el envío del aviso no es suficiente para imponerle a la administración el

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

ejercicio de una carga que solo surgirá de inmediato, si transcurrido ese tiempo hay certeza del recibo de la primera comunicación por el administrado.

Las anteriores observaciones dejan claro que el uso de la interpretación textual de las palabras de la ley no puede ser tenido como único, exclusivo o excluyente criterio clarificador del sentido y alcance de un enunciado.

Recuérdese que, en el derecho fundamental al debido proceso, en el particular aspecto de las notificaciones, puede desarrollarse bajo la loable intención institucional de velar por un proceso breve, expedito y dinámico, pero que respete por igual, los intereses del ciudadano y de la administración, al tiempo que no debe pasarse por alto el abuso de las posiciones dominantes, tampoco debe auspiciarse que los administrados resulten cobijados de beneficios, cuando provengan de la renuencia, de la desidia, o como lo dijera por el Consejo de Estado, - por una conducta del propio interesado que pretende entorpecer las funciones de la administración e impide que se surta con éxito la notificación-.

Pues bien, descendiendo al caso bajo estudio y una vez revisada la resolución que agotó la actuación administrativa, esto es, la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la hoy demandante, se tiene que la entidad demandada confirma la multa impuesta a Electricaribe, argumentando para ello, que la notificación por aviso debió realizarse el 03 de agosto de 2015 (**día hábil**) y no el 1 de agosto (sábado) como lo hizo la entidad, lo que a su juicio provocó la extemporaneidad y por ende la indebida notificación.

En este punto se observa, que uno de los argumentos de la entidad accionada utilizada en muchos casos donde se discute el silencio administrativo positivo, es que el envío de la notificación del aviso debe darse al día sexto del envío de la citación de notificación personal, sin embargo en el caso bajo estudio, como se estudiará más adelante, el envío fue enviado el día sexto (**01 de agosto – día sábado**), no obstante, para la Superintendencia de Servicios debía hacerse el día octavo – día hábil (**03 de agosto – Lunes**), con lo que, se evidencia, que no hay un criterio de interpretación unificado al interior de la entidad, pues como se observa, el envío se hizo el día sexto, día laboral para la entidad demandante.

Al margen de lo anterior, es menester dejar claridad que bajo los lineamientos estudiados, no estaba obligada Electricaribe S.A. a remitir al usuario la respectiva notificación por aviso, un (1) día después del vencimiento de los 5 días correspondientes al envío de citación para notificación personal, toda vez que dicho término se debe comenzar a contabilizar desde el día siguiente en que efectivamente es recibida tal citación por parte del usuario. Pero si Electricaribe S.A. E.S.P., realizaba las diligencias de notificación personal y por aviso, dentro del plazo de 15 días que consagran las normas para responder y notificar la respuesta, dicho trámite resultaba válido y ajustado a derecho, así hiciera el envío del aviso en el séptimo, octavo, noveno etc, día después del envío de la citación para notificación personal, siempre que estuviera dentro del mencionado término de los 15 días.

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta la articulación existente entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

envió de la citación para notificación personal de la respuesta y el aviso en los casos que sea procedente, dentro de los términos que la ley otorga para ello, y se soporta acuerdo al contenido de las pruebas documentales existentes en el expediente, tenemos que, Electricaribe cumplió con su obligación de enviar la notificación por aviso dentro del término legal establecido en la ley 1474 de 2011, es decir al cabo del quinto (5) día del envío de la citación para notificación personal.

A propósito, véase:

- El **22 de julio de 2015**, el usuario ISRAEL DE JESUS BLANCO presentó respectiva reclamación a Electricaribe S.A. E.S.P.

- A partir de la solicitud presentada, la empresa contaba con quince (15) días hábiles para proferir la respectiva respuesta, los cuales vencían el **23 de julio de 2015**, profiriendo decisión empresarial en término en fecha **22 de julio de 2016**.

- En fecha **24 de julio de 2015** se remite citación de notificación personal, teniendo el usuario **entre el 27 de julio y el 31 de julio de 2015** para comparecer a notificarse personalmente, por lo cual la notificación por aviso se remitió de conformidad a la normatividad estudiada, al día sexto, esto es, el día **01 de agosto de 2015**, que si bien era sábado, es de anotar, que si la empresa labora ese día y la empresa de correo recibe la correspondencia no hay impedimento legal para su remisión ese día.

En este punto, cabe advertir que no son de recibo, los argumentos esgrimidos por la entidad demandada en la contestación y en los alegatos de conclusión, relacionados a que la sanción fue impuesta por cuanto la entidad demandante además de la extemporaneidad, no cumplió con el requisito de publicar en la pagina web el aviso correspondiente, ello, atendiendo a que los actos administrativos demandados no se basaron en dicha situación particular, sino solamente a que el envío del aviso se hizo de manera extemporánea, lo cual ,como se dejó anotado en líneas anteriores no resultó cierto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la articulación existente entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el envío de la citación para notificación personal de la respuesta y el aviso en los casos que sea procedente, dentro de los términos que la ley otorga para ello, y de acuerdo al contenido de las pruebas documentales existentes en el expediente, se tiene por probada la diligente gestión realizada por la empresa prestadora del servicio público, en ese orden de ideas, tenemos que el trámite de notificación con el envío de la citación se realizó dentro del término de que trata el artículo 68 del CPACA, esto es dentro de los 5 días siguientes a la emisión de la respuesta y el aviso fue enviado al cabo del término señalado en el artículo 69 del CPACA, una vez venció la oportunidad para notificarse personalmente, cumpliéndose con la debida notificación de la respuesta, por lo cual la imposición de términos restrictivos a la demandante por parte de Superintendencia de Servicios Públicos, conlleva a una exigencia y una carga desorbitante en desmedro de la actuación administrativa adelantada por la empresa de servicios públicos.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

Para el Despacho, la empresa Electricaribe en el trámite de notificación analizado, si cumplió con los términos señalados en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, comoquiera que el envío del aviso se hizo al cabo de los 5 días que tenía el usuario para notificarse personalmente, por lo que no deviene extemporáneo, es decir, la norma lo que dispone es el inicio de la habilitación para la realización de la notificación subsidiaria a través del aviso por haber fracasado la notificación personal, sin precisar un término para ello, sin embargo este aparente vacío tiene solución en la interpretación sistemática que debe hacerse con el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, ya que el trámite de notificación principal o subsidiarios, a saber, personal – aviso – publicación en la página web y en la sede de la entidad, deberá surtirse dentro de los 15 días que estipula la norma so pena de la ocurrencia del silencio administrativo positivo. Pues la importancia del trámite de notificación es dar a conocer la decisión en procura del derecho de defensa y contradicción y al exigir que para efectuar la notificación subsidiaria a través del envío del aviso se realice exclusivamente al sexto día del envío de la citación para notificación personal, es un exceso ritual manifiesto impuesto al investigado, si se tiene en cuenta que el término de los 15 días ya es estricto al exigir que se dé la respuesta y su notificación, respetando todos los términos que dispone la Ley 1437 de 2011 para la debida notificación.

En consecuencia, tenemos que, pese a la postura favorable de la Superintendencia en el procedimiento sancionatorio al entender que el término de los 15 días del artículo 158 de la Ley 142 de 1994 solo comprende como exigencia la respuesta a la petición, al recaer el fundamento de la decisión sobre la indebida aplicación del artículo 69 del CPACA, por no enviarse la notificación por aviso exactamente el día sexto, siguiente al envío de la citación para notificación personal, el ente investigador realiza una interpretación errada de esta última norma, imponiendo una carga excesiva a las empresa prestadora de servicios públicos al momento de efectuar el trámite de notificación, toda vez que como se indicó previamente si el aviso es enviado al cabo de los cinco (5) días previsto en la norma, la notificación se tiene realizada en debida forma, siempre que esta se produzca dentro del término de los 15 días previstos en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, es decir más que el requisito formal -del sexto día- lo que debió verificar la SSPD era la debida respuesta y notificación dentro del término de configuración del silencio administrativo positivo.

5. Conclusión.

En ese orden de ideas, el Despacho declarará la nulidad parcial de los actos acusados y emitirá orden de restablecimiento del derecho en favor de Electricaribe S.A. E.S.P., sobre todo al considerarse lo siguiente:

Una de las características de los actos administrativos acusados es la presunción de legalidad, lo que concordado con el art. 167 del C.G.P., impone a quien pretende la nulidad de dichos actos administrativos, la carga de demostrar la ocurrencia de los cargos de nulidad que proponga en contra de esos actos.

Pues bien, en el presente caso se evidenció que el cargo de falsa motivación tiene vocación de prosperar, derrumbándose la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos acusados.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

6. Condena en Costas

Finalmente, el Juzgado no condenará en costas, debido a que la parte vencida no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, **el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las siguientes Resoluciones, en lo que atañe a la sanción pecuniaria impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a Electricaribe S.A. E.S.P.:

- a) Artículo primero de la Resolución No. SSPD-20168200088615 del 2016-06-09, expedida por el Directora Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que impuso multa equivalente a \$6.894.540,00 en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., por encontrarla culpable de ocurrencia de silencio administrativo positivo en relación con petición que le realizó uno de sus usuarios.
- b) Resolución No. SSPD – 2017800050405 del 2017-04-10, expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que, al resolver recurso de reposición, confirmó en todas sus partes a la Resolución No. 20168200088615.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se **DECLARA** que Electricaribe S.A. E.S.P no está obligada a pagar la multa impuesta en los actos administrativos anulados, por las razones contenidas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: En el evento que Electricaribe S.A. E.S.P haya pagado la multa impuesta con ocasión de las resoluciones afectadas con las resultas de esta sentencia, se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios proceda a la restitución del dinero, por lo expuesto en las consideraciones de este fallo.

CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: RECONOCER personería jurídica a la Dra. ANA RITA OLIVEROS OYOLA, identificada con cedula de ciudadanía N° 32.763.319 y Tarjeta Profesional N° 91.966 del Consejo Superior de Judicatura, en calidad de apoderada de la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios para los efectos y fines establecidos en el poder conferido.

SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente sentencia al Procurador delegado del Ministerio Público ante este Despacho.

N y R No. 08-001-33-33-006-2017-00441-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

SÉPTIMO: DÉSELE cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

OCTAVO: Sin costas, de conformidad con el artículo 188 del CPACA

NOVENO: Una vez ejecutoriada esta sentencia, ARCHÍVESE el expediente.

DÉCIMO: Se ordena la expedición de copias que soliciten las partes, conforme a lo previsto en el artículo 114 del CGP.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ

Juez

L.P.M

Firmado Por:

Lilia Yaneth Alvarez Quiroz

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Contencioso 006 Administrativa

Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3f50160f06879a45a3680d28d3708d19f0753e6d1d8a51520730ca94d8c14ad8**

Documento generado en 30/09/2021 06:07:54 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>